

ANÁLISIS DE COYUNTURA

Rafo Puente

1. El estado colonial y oligárquico fundado en 1825

La creación del estado boliviano estuvo precedida de dos movilizaciones insurgentes. Primero la gran insurrección indígena independentista de 1780-81, y después la “Guerra de la Independencia” de 1809-25. La primera empezó con el levantamiento de Tomás Katari (en Chayanta) y de Túpaj Amaru en Cuzco; y siguió con la lucha dirigida desde La Paz por Túpaj Katari. La dimensión política predominante —casi exclusiva— de este movimiento insurgente fue de tipo étnico-cultural, lo que explica su aislamiento respecto de los sectores sociales urbanos (los pobres, no necesariamente indígenas, que casi espontáneamente se alinearon en defensa de la corona española) y su consiguiente rápida derrota.

En cambio durante los 16 años de la lucha independentista iniciada en 1809 la dimensión étnico-cultural se difumina, y ocupa el primer plano la que podemos llamar dimensión “patriótica-nacionalista”, acompañada en muchos momentos de la dimensión social-clasista. El espectro de la movilización es por tanto decisivamente más amplio — y además está acompañado de luchas equivalentes en todo el continente— y puede desembocar en una victoria militar. Pero precisamente la ausencia de la dimensión étnico-cultural explica que dicha victoria militar se convierta en derrota política y dé lugar a ese “gran escamoteo” que fue la apropiación de los largos años de lucha por parte de las élites criollas, que en último momento se convierten al bando patriota y — con el apoyo ingenuo de Sucre y Bolívar— constituyen un estado republicano neo-colonial y por supuesto oligárquico.

La expresión más extrema de ese estado es el sistemático despojo de tierras comunales aymaras por los presidentes conservadores que en treinta años —desde Melgarejo hasta Frías— amplían y consolidan el latifundismo feudal y provocan el resentimiento y la rabia que llevan al pueblo aymara a organizarse política y militarmente. El resultado final es la Guerra Aymara de 1899 (“Guerra Federal” la llaman nuestros historiadores) que, acaudillada por Zárate Willka en alianza con el Partido Liberal, derrotará al Partido Conservador e inaugurará —previa traición a Zárate Willka y sus fuerzas por parte de sus aliados liberales— la nueva fase estatal de los señores del estaño. Una vez más la victoria militar se convierte en derrota política, esta vez por ausencia de la dimensión social-clasista que permite al movimiento indígena confiar en sus aliados de la casta dominante.

2. Las luchas anti-oligárquicas y el nuevo estado (siempre colonial)

La traumática experiencia de la Guerra del Chaco, donde fermenta una nueva conciencia política de todos los sectores y pueblos del país, que además encuentran en las amargas experiencias de la guerra un espacio de conocimiento e intercambio mutuos, pone en marcha un nuevo proceso insurgente cuya dimensión predominante es

claramente social-clasista, con un fuerte componente patriótico-nacionalista. A partir de 1936 la gran mayoría campesina-indígena del país se organiza en sindicatos agrarios y socava los cimientos del viejo estado oligárquico (básicamente minero y feudal), preparando así el camino para la insurrección obrera de abril del 52. A lo largo de este proceso se van turnando gobiernos de izquierda y derecha cada vez más radicalizados, entre los que destaca el de Germán Busch, cuya Constitución Política del Estado (1938) rompe la línea de la serie de constituciones oligárquicas e inaugura una nueva serie de constituciones de contenido social, pero sin modificar —ni antes ni después— el carácter neo-colonial del estado boliviano.

La ausencia de la dimensión étnico-cultural explica que nuevamente la victoria insurreccional del 52 sea entregada a un grupo de criollos —dirigentes del MNR— que obedientes a la Embajada de los Estados Unidos van vaciando los contenidos de la revolución y preparando su reversión. En esta compleja fase del “estado nacionalista”, que se caracteriza por la permanente contienda nunca del todo resuelta entre el polo obrero-popular —representado por la COB— y el polo de restauración oligárquica —representado por los sucesivos golpes militares, desde Barrientos hasta García Meza—, encontramos un breve momento culminante que es el gobierno de Torres. En él el polo popular parece alcanzar su momento de máxima fuerza con la constitución de la Asamblea Popular, pero el fácil golpe de Bánzer demuestra la fragilidad de una asamblea que pretende ser *popular* pero sin incluir a esa gran mayoría de la población que son los pueblos indígenas. Nuevamente la dimensión social-clasista, separada de la étnico-cultural, desemboca en frustración.

Y en 1982-85, justo cuando parece superarse el ciclo fatídico de golpes militares, incluyendo la ruptura del “Pacto Militar-Campesino” y la creación de la CSUTCB, y se entra a un gobierno de real mayoría popular —el de la UDP, donde una vez más estuvo ausente la dimensión étnico-cultural—, el modelo estatal inaugurado el 52 aparece totalmente agotado. La incapacidad de la UDP —y de las fuerzas de oposición de izquierda, tanto políticas como sindicales— para diagnosticar ese agotamiento, más las debilidades internas de los partidos que la componen —y que se ocupan más de sus espacios de poder que del destino del país—, preparan el terreno para la recuperación formalmente democrática del poder por parte de las fuerzas conservadoras y neo-oligárquicas que, esta vez sin necesidad de ningún golpe de estado, reciben el apoyo decepcionado de la mayoría de la población y sí aparecen decididas a sustituir el agotado modelo ‘nacionalista’. Y así entramos a la fase neo-liberal de la que todavía no acabamos de salir.

3. La vuelta al estado oligárquico (y colonial)

El triunfo absoluto de las fuerzas de derecha en las elecciones de 1985, que se basa en el desencanto de los sectores populares tras el fracaso de la UDP, abre las puertas para que se imponga en Bolivia el modelo de estado neo-liberal, de acuerdo con las más ortodoxas recetas de los organismos multinacionales. Los “ajustes estructurales” se van imponiendo a lo largo de los sucesivos gobiernos de “democracia pactada” y de obsecuencia a los mandatos del nuevo dueño del mundo que es el mercado (con sus mercaderes transnacionales) y los bien conocidos “organismos multilaterales”.

- 3.1 De 1985 a 1989 el gobierno del “Pacto por la Democracia” (MNR-ADN) nos impone —con el famoso DS 21060— la supresión de las subvenciones públicas a la economía popular y un paquete de “libertades” de corte típicamente liberal: la *libertad* de cambio, la *libertad* de comercio, la *libertad* de contratación y la *libertad* de precios (más la *libertad de capitales* que sienta las bases para la incorporación a la economía formal del dinero del narcotráfico); e inicia la privatización de la economía con la destrucción de la minería estatal. Luego nos impone una reforma tributaria (Ley 843) que carga el peso de la financiación del nuevo estado sobre las espaldas de la mayoría empobrecida. Y antes de terminar, rompiendo la coherencia liberal, somete al país al control norteamericano de la lucha contra el narcotráfico —¡y de la producción de hoja de coca!— con la Ley 1008.
- 3.2 De 1989 a 1993 el gobierno del “Acuerdo Patriótico” (MIR-ADN) se limita a legislar la privatización de la economía, a promulgar nuevos códigos de hidrocarburos y minería favorables a la penetración de capitales extranjeros, y a practicar la privatización de pequeñas empresas públicas (ejemplarmente combinada con corrupción). Adicionalmente nos obsequió con la Ley SAFCO, que en los hechos ha demostrado ser totalmente inútil para el control de la corrupción y muy eficaz a la hora de trancar el funcionamiento del aparato estatal, y con una Ley de Medio Ambiente que podría haber tenido efectos muy positivos pero que nunca fue aplicada en su intencionalidad original.
- 3.3 De 1993 a 1997 el gobierno de Sánchez de Lozada (MNR-MBL-MRTKL-UCS) fue el que de manera más consistente estructuró el modelo neo-liberal con una serie de reformas de las que vale la pena resumir las siguientes (por orden de importancia, más que cronológico):
- 3.3.1 La “**Capitalización**” de las grandes empresas públicas, previamente propagandizada como alternativa exitosa a la tradicional ‘privatización’ pero que en los hechos resultó mucho más beneficiosa que ésta para el capital extranjero. En realidad fue el regalo de las grandes empresas del estado (Telecomunicaciones, Electricidad, Aeronavegación, Ferrocarriles, Hidrocarburos) a consorcios transnacionales que se apoderaron de nuestra economía dejando como resultado la reducción de la economía estatal a condiciones tan miserables que para todo había que recurrir a créditos externos, junto a un crecimiento pavoroso del desempleo.
- 3.3.2 La creación de las **Superintendencias**, mediante la Ley SIRESE, un nudo final para dejar definitivamente amarrada la entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras, que son las que de verdad controlaban a las Superintendencias, instancias independientes del Poder Ejecutivo.
- 3.3.3 La reforma del **Fondo de Pensiones**. Significó la privatización de la seguridad social, la ruptura del principio de solidaridad, y un feroz endeudamiento del estado que se ve obligado a atender a los anteriores jubilados sin poder contar con los aportes de los asegurados actuales (aportes que benefician a una “Aseguradora” propiedad de bancos extranjeros).
- 3.3.4 La ley de **Participación Popular**. Fue una forma interesante de descentralización del estado por la vía de municipalizar todo el territorio

nacional, de reconocer el derecho de voto y participación de toda la población de cada municipio, de descentralizar recursos públicos y establecer recursos propios de cada municipio. Pero al mismo tiempo extendió la nefasta influencia de los partidos políticos a todos los rincones del país, descentralizó y multiplicó la cultura de la corrupción, intentó degradar al *ciudadano* a la categoría de mero *consumidor* de bienes y servicios, y al final sirvió como un brazo del nuevo modelo para controlar a la población, por una parte a través de su atomización, y por otra parte enredándola —junto a sus alcaldes más o menos autóctonos— en una malla de juridicismos (además de someterlos a una absurda normativa centralista).

3.3.5 La ley de **Descentralización Administrativa**, que aportó cierta agilidad en términos de trámites pero a la larga sólo sirvió para multiplicar por 9 la burocracia estatal, y para descartar una descentralización política que quedó como bandera de reserva para las élites regionales que ahora resisten al actual gobierno.

3.3.6 La ley de **Reforma Educativa**. Detrás de una renovadora concepción pedagógica (importada de España y no nacida de las experiencias nacionales), estructuralmente esta ley intentaba también reforzar a largo plazo el modelo político-económico privatizador y excluyente.

3.3.7 Atención a los temas transversales de **Género, Generación y Etnias**. Fue indudablemente positivo despertar la atención nacional y la conciencia social respecto de temas tan importantes, pero seguidamente esa atención se puso al servicio de un intento de control político de la juventud, de las organizaciones de mujeres y de los pueblos indígenas.

3.3.8 La **Reforma del Poder Judicial**, una reforma que no modificó en nada el carácter corrupto, burocrático y pro-oligárquico del aparato judicial, sino que en los hechos se redujo a la creación de super-estructuras como el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional, y así sirvió para reforzar el control jurídico del estado y de la sociedad por parte de los grupos de poder que —mediante sus parlamentarios— designaban los respectivos funcionarios de dichas instancias. Hoy el Tribunal Constitucional es la mejor trinchera que tienen los grupos conservadores para oponerse a la transformación del estado.

3.4 De 1997 a 2002 el gobierno de la “Megacoalición” (ADN, MIR, UCS, CONDEPA), se limita a completar el cuadro con la privatización de las **refinerías** de petróleo y una serie de decretos favorables a las grandes empresas petroleras. Simbólica de este gobierno de postrimerías fue la frase del Vicepresidente Jorge Quiroga —que luego sería Presidente de la República— cuando afirmó por televisión que “**la soberanía es un concepto obsoleto**”... Pero a este gobierno ya le tocó enfrentar la primera fase de la nueva insurgencia social que se menciona a continuación.

En resumen, al cabo de más de veinte años de modelo neo-liberal el país se ve gravemente amenazado por las políticas internacionales de libre comercio, sometido a monopolios extractivos y se servicios que estrangulan la economía nacional, y atravesado además por un cúmulo de problemas sociales: desempleo masivo, migración interna y externa igualmente masivas, fragmentación de la población urbana

que ya constituye la mayor parte de la población nacional, e incremento de la asocialidad y la delincuencia. Pero precisamente por ese desbordamiento de las consecuencias del modelo se explica el nuevo proceso de insurgencia que se analiza a continuación.

4. El proceso de nueva insurgencia social

Tras quince años de aceptación resignada del modelo neo-liberal, y de creciente desesperación popular ante el espectáculo de enajenación nacional, injusticia social, descrédito del sistema democrático y de sus partidos, desempleo masivo, corrupción impúdica, y elevación alarmante de los índices de asocialidad y delincuencia, la población empieza a reaccionar a través de movilizaciones que cuestionan el modelo y que poco a poco cuestionan al mismo estado, movilizaciones que valdrá la pena enumerar a continuación.

- 4.1 El año **2000** se produce en Cochabamba la **Guerra del Agua**, una movilización masiva —y en gran medida espontánea— de la población urbana, decididamente apoyada por las organizaciones campesinas rurales, que hace a un lado a partidos políticos, juntas vecinales, comités cívicos, parlamentarios y demás sujetos de la vida política formal, y que a lo largo de tres *batallas* (enero, febrero y abril) logra imponer la ruptura del contrato con ‘Aguas del Tunari’ —en realidad la empresa norteamericana Bechtel— a la que el Gobierno y la Alcaldía habían entregado el control de las aguas de la cordillera. La demostración de que se puede expulsar a una transnacional abre el gran boquete inicial en la estructura del modelo (más allá de la decepción que luego producirá la Coordinadora del Agua y su incapacidad para inaugurar una nueva etapa de *gestión social* del agua, como había postulado el pueblo movilizado).
- 4.2 A continuación de esta rebelión de los pobres bolivianos contra un modelo pensado para ricos extranjeros, el mismo año **2000** y el **2001**, en los alrededores del Titicaca, la zona aymara políticamente más activa, se producen **movilizaciones aymaras** contra el estado colonial con una clara reivindicación de tipo étnico-cultural, movilizaciones que sólo se apaciguan tras concesiones más o menos demagógicas del Gobierno.
- 4.3 En junio del **2002** tiene lugar la cuarta **Marcha Indígena** que se inicia en las Tierras Bajas y que impone en la mesa de debate nacional el tema de una Asamblea Constituyente (ya en ese momento orientada a la *re-fundación* de este país mal fundado), reivindicación que es rechazada por todas las instancias del *poder constituido* pero que en poco tiempo acabará por imponerse. Y en julio del mismo año las **elecciones generales** arrojan como resultado sorprendente el segundo lugar para la candidatura de Evo Morales, prenunciando ya el resultado electoral del 2005.
- 4.4 En **febrero del 2003** se produce la llamada guerra del “**Impuestazo**”, sublevación urbana con epicentro en La Paz y El Alto contra un intento de resolución de problemas fiscales mediante el mecanismo típicamente neo-liberal de exprimir más todavía la economía popular. Esta movilización —espontánea e independiente de todo sujeto político formal, como las anteriores— tiene también como ingrediente

trágico un enfrentamiento entre Policía y Fuerzas Armadas (con saldo de muertos y heridos) que por una parte distorsiona la naturaleza de la movilización pero por otra sirve para mostrar que el malestar político ha llegado a la misma “institución del orden”.

- 4.5** En **octubre del 2003** tiene lugar la **Guerra del Gas** que culmina con la expulsión del presidente Sánchez de Lozada y que marca el principio del fin del modelo dominante. No hay que olvidar que el presidente prófugo era el mejor símbolo del modelo y de la dominación del gobierno de Estados Unidos en nuestros países. Pero la voluntad popular es tan decidida que poco a poco todos los puntos de apoyo que tenía ese gobierno se ven obligados a ceder y aconsejar al presidente una retirada prudente (si bien a todas luces tardía).
- 4.6** El año **2004** el presidente Mesa convoca a un **referéndum** trucado sobre , con el que por una parte queda clara la voluntad nacional de recuperación de nuestros recursos, pero por otra se deja abierta la puerta para su negociación en condiciones desventajosas (cuya expresión será la generosa entrega de gas a la Argentina).
- 4.7** El año **2005** el mismo presidente, desesperado por la arremetida de los grupos de poder atrincherados en Santa Cruz (y a los que él mismo había fortalecido con un decreto que incrementaba los precios del diesel), les hace dos **concesiones inconstitucionales** —la *elección de prefectos* y el *referéndum autonómico*— que en los años siguientes tendrán serias consecuencias para el actual gobierno.
- 4.8** Cada vez más impotente para controlar una creciente polarización política del país, el mismo año **2005** Mesa renuncia a la presidencia y provoca las **jornadas de junio** —con epicentro en la ciudad de Sucre— que impiden la sucesión constitucional a favor del senador Hormando Vaca Díez o del diputado Mario Cossío (las últimas cartas del sistema quebrado) y fuerzan la convocatoria a **elecciones generales** en las que Evo Morales obtiene el 54 % de la votación nacional. Y entramos a la actual coyuntura.

5. La generación de un nuevo *Instrumento político*

Paralelamente a este despertar de un nuevo sentimiento de contestación anti-liberal por parte de crecientes sectores de la sociedad, fue madurando un nuevo instrumento político formal que hoy se llama MAS y cuyos orígenes deben buscarse en la experiencia del movimiento cocalero. Las seis federaciones de productores de coca del Trópico de Cochabamba fueron uno de los sujetos sociales más activos en la contestación al modelo, ya que en dicha región se concentraba por una parte la experiencia clasista de los trabajadores empobrecidos (muchos de ellos mineros), por otra parte la vivencia étnico-cultural de grupos indígenas que producían hoja de coca (la milenaria hoja sagrada) y finalmente la experiencia directa de lo que significa la intromisión violenta de la política norteamericana y multinacional en contra de esa misma hoja de coca.

En 1994 dicha organización pone en marcha el llamado *Instrumento Político* de los pueblos indígenas y movimientos sociales, que inicia su participación en la vida política formal dentro del frente llamado Izquierda Unida; con esa sigla obtiene resultados

positivos y novedosos primero en los municipios del Trópico de Cochabamba (1994) y luego en el departamento de Cochabamba (1997) con la elección de cuatro diputados, entre ellos Evo Morales. La gestión de este dirigente es interrumpida con su expulsión de la Cámara de Diputados por instrucciones de la Embajada de Estados Unidos, hecho que lo catapulta para su futura candidatura a la Presidencia. Dicha candidatura ya se da con la sigla de MAS (Movimiento Al Socialismo) y le permite ocupar un segundo lugar el año 2002.

A partir de ese momento el “instrumento político” de los movimientos sociales y pueblos indígenas entra en un difícil proceso —que se agudizará a partir del triunfo electoral del 2005 y el acceso al gobierno— en el que progresivamente se va imponiendo, al menos en muchos dirigentes, una concepción de “partido”, es decir de organización política que se sirve de los movimientos y las organizaciones sociales, en lugar de estar a su servicio.

6. Características que marcan la actual coyuntura

6.1 Su carácter tridimensional

Una insurgencia política puede estar alentada por diferentes formas o dimensiones de conciencia, ya que una persona o un grupo pueden estar motivados por las duras condiciones de pobreza y explotación en que viven (dimensión social o clasista), o bien puede estar motivada por sentimientos de defensa de su país contra la opresión o intervención extranjera (dimensión nacionalista o patriótica), o finalmente puede estar motivada por el sentimiento de discriminación o marginación que sufre el propio pueblo de parte de otro pueblo que lo domina (dimensión étnico-cultural). No siempre esas tres dimensiones coinciden en un mismo movimiento de insurgencia política. Si repasamos las páginas anteriores nos encontraremos con que en determinados momentos de insurgencia social predominaba una u otra de esas dimensiones, o bien la combinación de dos de ellas.

Si comparamos todas esas etapas de insurgencia con la que ahora estamos viviendo, llama la atención que por primera vez en la historia nuestro pueblo se encuentra en estado de insurgencia con una combinación de las tres dimensiones mencionadas, aunque no siempre se manifiesten con la misma intensidad ni el mismo nivel de articulación.

Está presente la **dimensión étnico-cultural**, además con una extensión superior ya que abarca (como nunca antes en la historia) a los grandes pueblos originarios andinos y también a los pueblos pequeños y dispersos de las regiones amazónica y chaqueña, que incluso han asumido un papel protagónico en momentos decisivos (de ellos vino la consigna de Asamblea Constituyente; como de ellos viene también el mayor esfuerzo de unidad social visto hasta ahora, un esfuerzo que se inició con el *Bloque Oriente* y que ahora se encuentra en la fase del *Pacto de Unidad*, instancia todavía frágil e insuficiente, pero evidentemente novedosa). Y es a partir de esa convocatoria indígena —y de lo que podemos llamar un auténtico *liderazgo* indígena, que convencidamente muchos no indígenas acatamos— que tenemos que interpretar la actual Asamblea Constituyente cuya misión es la *refundación* o transformación del país.

Pero al mismo tiempo (y parcialmente en los mismos sujetos) está presente también la **dimensión social-clasista**, que lucha por el fin de la explotación y contra los viejos patrones (u oligarcas). Y finalmente está presente la **dimensión patriótica** que pretende liberar al país de la tutela transnacional y de la permanente injerencia norteamericana. Y precisamente porque Evo Morales representa los tres niveles simultáneos de insurgencia resulta el indiscutido dirigente (y presidente) de esta insurgencia. Veámoslo en esquema:

Fecha	Insurgencia	Dimensión Social-clasista	Dimensión Patriótica	Dimensión Étnico-Cultural
1870-71	Tomás Katari, Túpaj Amaru, Túpaj Katari		(x)	X
1809-25	Guerra de la Independencia	X	X	
1899	Guerra Aymara-Federal (Zárate Willka)	(x)		X
1936-52	Revolución Nacional	X	X	
1970-71	Asamblea Popular	X	(x)	
1978-85	Unidad Democrática y Popular (UDP)	X	(x)	
2000-07	Nueva insurgencia anti-colonial y anti-oligárquica	X	X	X

Esta característica inédita de la coyuntura que vivimos es la que explica su extraordinaria fuerza, y también la insuficiente nitidez de su perfil. La combinación de las tres dimensiones la puede hacer menos formulable en términos de consignas y programas, pero a cambio le da una capacidad de resistencia que ya estamos comprobando. Por eso al enemigo —el colonial externo, el neo-colonial interno, y el patronal— le resulta muy difícil, pese a su superioridad económica y a su alevosía política (y pese también a las debilidades y a los errores —en parte inevitables— del actual gobierno), revertir este proceso. Tal es el punto de partida que nos permite calificar de único y esperanzador este momento político de triple insurgencia simultánea, y que también nos permite diseñar un nuevo estado soberano, multi-nacional y con justicia social.

Cierto que la articulación entre las tres dimensiones no siempre se manifiesta; cierto que la población indígena urbana no acaba de encontrar expresiones orgánicas; cierto que en momentos pareciera surgir el peligro de ciertas tendencias etno-céntricas de parte de algunos grupos indígenas; cierto finalmente que el liderazgo indígena puede provocar una peligrosa agudización del racismo oligárquico. Pero todo esto no quita —por el contrario, pone más de relieve— el carácter inédito de la coyuntura que estamos viviendo (y la consiguiente responsabilidad histórica de personas e instituciones).

6.2 El marco internacional

Sólo cabe hacer —por razones de tiempo y espacio— dos consideraciones básicas.

La primera es que el marco internacional, comparado con el de hace cincuenta años —o incluso menos, recordemos la nacionalización del petróleo por el gobierno de Ovando y su ministro Marcelo Quiroga en 1969—, resulta claramente menos favorable, ya que entonces vivíamos en un mundo bi-polar (sin precisar la calificación de ninguno de esos polos) y eso permitía a países débiles como el nuestro —o como aquella Cuba de 1959— un margen de maniobra mayor que el que tenemos hoy, prisioneros de un mundo unipolar, con un polo de poder más prepotente y alevoso que nunca en la historia de la humanidad.

La segunda es que, en comparación con hace sólo diez o quince años, estamos en condiciones claramente más favorables. Hoy en todos los continentes son cada vez más los grupos, las personas, las organizaciones no-gubernamentales y los movimientos que cuestionan el pensamiento único, cuestionan la soberanía del mercado global y su *libre comercio*, cuestionan el intervencionismo guerrero de los Estados Unidos y sus satélites, se reúnen en foros sociales mundiales o continentales y afirman con creciente convicción que *otro mundo es posible*. Cada vez son más los pueblos que se atreven a luchar por su dignidad (en Corea, en Guinea, en Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica, México y Perú, incluso en Europa, Estados Unidos y Canadá). Y cada vez son más los gobiernos que se atreven a disentir de los dogmas globales, que le dicen no a la OMC y al proyecto de ALCA, que denuncian el incumplimiento flagrante de convenios internacionales por parte de los dueños del planeta, e incluso son cada vez más los gobiernos —en nuestro propio continente— que se atreven a desmontar el modelo neo-liberal —ahí están recientemente el de Venezuela, el de Bolivia y ahora el de Ecuador—. Y eventualmente esta actitud contestataria frente al sistema global también alcanza al mundo institucional, incluyendo algunas instancias de cooperación para el desarrollo... Es pues importante tener en cuenta que, pese a las dificultades de vivir en un mundo unipolar, no estamos solos sino cada vez más acompañados.

6.3 El bando conservador

Es indiscutible que el país se halla dividido en dos bandos netamente discrepantes y probablemente irreconciliables. El repetido discurso del *consenso*, de *ponerse la camiseta de Bolivia*, de reunir o *complementar* a los *opuestos* en una *síntesis* equivalente a las dos parcialidades de un mismo *ayllu*, no deja de ser un discurso voluntarista y moralizante (y en último término favorecedor del bando conservador). Es impensable que quienes han usufructuado del estado durante 180 años, han acumulado privilegios —y se sienten por herencia de los “fundadores” los únicos auténticos *bolivianos*— estén dispuestos a resolver por la vía del consenso la desaparición de esos privilegios y el reconocimiento de los derechos fundamentales que tienen los dueños históricos de este territorio. Por tanto estamos asistiendo a una confrontación inevitable (que los errores del Gobierno la precipiten y la compliquen más de lo necesario, es otro tema); la disyuntiva es resolver esa confrontación a tiros —en una guerra civil que nadie quiere, con excepción de cuatro desquiciados— o resolverla a gritos y a votos —siguiendo las supuestas reglas de la *democracia* moderna que tanto nos predicamos—, es decir acatando al final de los gritos y los votos la decisión de la mayoría (llegue o no a los dos tercios de representación formal).

Ese bando conservador se encuentra indiscutiblemente en situación de derrota —o bancarrota— política: sus partidos están totalmente desacreditados, sus líderes no convencen ni siquiera a su propio bando, y sobre todo carecen totalmente de algo que se parezca a un proyecto nacional. Pero tal derrota se da en el plano político, es decir simbólico; en el plano real siguen conservando casi todos los espacios de poder: el control de la economía (incluyendo los mecanismos estatales del ministerio de Hacienda y del Banco Central), el control de la tierra y de la agroindustria, la asociación servil con las empresas transnacionales, el control del Senado, el control del Poder Judicial y del Ministerio Público, y sobre todo el control casi total de los medios de comunicación (y por tanto de la opinión pública).

Sería pues ilusorio que los movimientos sociales creyeran —como de hecho muchos parecen creer— que “estamos en el poder”. Sólo ocupamos una pequeña parcela y sólo una adecuada “Estrategia de Poder” nos permitirá superar esa ilusión óptica.

Por lo demás la preocupación por la fuerza, la consistencia y la importancia del bando *conservador* (en realidad es más que “conservador”) nos debiera llevar a la tarea de estudiarlo, de conocerlo mejor, de saber quién es quién en ese bando, cuáles son sus eslabones fundamentales y cuáles son secundarios. Y es que el otro bando —el popular— para trazar su estrategia necesita urgentemente conocer en detalle al adversario.

6.4 El bando popular

Éste tiene dos componentes: Por una parte están las organizaciones y movimientos sociales; por otra su expresión estatal que es el actual Gobierno.

6.4.1 El actual **Gobierno** es innegable que puede inscribir en su columna de **logros** una serie de medidas acertadas y productivas, entre las que destacan la efectiva (aunque relativa) nacionalización de los Hidrocarburos; la nueva legislación de Tierras, la reorientación de la política minera, una serie de medidas a favor de los trabajadores, el simbólico pero por eso mismo importante *Decreto de Austeridad* etc. Todo ello, sumado a la actitud personal consecuente del Presidente y de muchos de sus colaboradores, permite mirar todavía el futuro con esperanza.

Pero en la columna negativa se tiene que registrar también una serie de **errores políticos** que vienen a fortalecer a la oposición oligárquica, entre los que destacan la presencia visible de representantes del viejo sistema dentro del esquema del Poder Ejecutivo; la conservación de funcionarios inútiles por mero criterio de autoridad; una muy deficiente política comunicacional que deja a la opinión pública a merced del poder mediático controlado por la derecha; una mala Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente; la concesión de un Referéndum Autonómico inconstitucional —seguida de una errónea consigna de votar NO a las autonomías, consigna además condenada a la derrota, y que les otorga a las oligarquías atrincheradas en las Tierras Bajas la bandera que no tenían—; y de manera general una multiplicación innecesaria de frentes de lucha, que incluían a las prefecturas ocupadas por la oposición, y en un momento dado incluso a la iglesia Católica.

Más grave aún es el hecho de que, tanto el Gobierno como los Pueblos Indígenas mayoritarios de las Tierras Altas y la mayor parte de los movimientos sociales, comparten la grave limitación de no tener una comprensión cabal de lo que son y significan en el país las **Tierras Bajas** y sus diferentes sujetos sociales: su sensibilidad cultural, sus problemas específicos, su antigua y sentida demanda de autonomía política, su estilo y su simbología. Esto ha llevado a que amplios sectores sociales de dichas zonas —lo mismo trabajadores que intelectuales— tengan la sensación de que el actual gobierno es básicamente “de los *collas*”, es decir exclusivamente andino, lo que resulta tanto más preocupante cuanto que en el momento actual las grandes contradicciones sociales y políticas —en torno a la tierra y el territorio, en torno a la propiedad de los hidrocarburos y otros recursos naturales, en torno al concepto de autonomía— tienen como escenario precisamente las Tierras Bajas.

6.4.2 Las **organizaciones sociales** en general —y muchos de sus dirigentes— presentan una preocupante ausencia de **conciencia política**, entendiendo por tal la comprensión elaborada de la estructura y coyuntura del país, de sus ingredientes, sus causas y sus perspectivas. Nuestros movimientos sociales han demostrado sentimiento político, convicción y decisión políticas, factores que les han permitido identificar lo que no quieren y sacudir severamente las estructuras del viejo estado. Pero para saber lo que sí quieren se requiere un nivel de conciencia que no se manifiesta. De ahí la permanente movilización de diferentes grupos con reivindicaciones meramente localistas o sectoriales, sin una visión estratégica que les permita identificar objetivos principales y secundarios, y en consecuencia planificar acciones escalonadas, jerarquizar batallas, postergar reivindicaciones secundarias... Aquí también puede inscribirse la permanente contienda por puestos de trabajo en el aparato del estado, que tanto está desgastando la gestión de gobierno. Es evidente la ausencia de proyectos políticos alternativos, y peor aún de una verdadera estrategia de poder. Y por supuesto todas estas debilidades de las organizaciones sociales, de una u otra manera se transmiten a las estructuras de gobierno (donde tampoco se advierte un espacio orgánico de reflexión política para la toma de decisiones), fuera de que obligan al mismo a desgastarse en el esfuerzo de controlar y satisfacer esa cadena de demandas sociales espontáneas y muy poco estratégicas.

Además cabe distinguir entre la sociedad rural-campesina y la sociedad urbana, atravesadas ambas por el componente étnico-cultural. La **sociedad rural-campesina** padece las deficiencias anotadas más arriba, pero sigue dotada de un mínimo de organización y organicidad; el factor indígena/originario está explicitado cada vez con más fuerza, los valores ancestrales siguen en gran medida vigentes; las formas organizativas tradicionales —donde la autoridad es realmente un servicio— todavía se encuentran vigentes. Por otra parte se percibe en este tipo de población campesina, y de sus organizaciones, una tendencia a entender la confrontación político-ideológica en términos de confrontación campesino-citadina, lo que constituye otra muestra de inmadurez de conciencia.

Por lo demás es precisamente en el área rural, y al servicio de las comunidades campesinas, donde están activas una notable cantidad de organizaciones no-

gubernamentales, algunas de ellas con verdaderos criterios de servicio a la comunidad, y también de acompañamiento y fortalecimiento del actual proceso.

Los **sectores populares urbanos**, en cambio, han sido doblemente víctimas de las consecuencias del proceso, de la manipulación de los anteriores gobiernos y de la permanente campaña distractiva y distorsionadora que llevan a cabo los diferentes medios de comunicación. Además la mayoría de los barrios populares son fruto de movimientos migratorios poco orgánicos —además agobiados por la sobrevivencia cotidiana—, por lo que presentan notable heterogeneidad y debilidad organizativa; de ahí que las mismas juntas vecinales (OTBs) y las masivas organizaciones gremiales sean en muchos casos poco representativas, cuando no objeto directo de manipulación por parte de partidos, alcaldes y prefectos. En momentos aparecen movimientos vecinales que con su movilización masiva y su sorprendente capacidad de organización parecen contradecir este diagnóstico (caso de la FEJUVE de El Alto); pero pasada la convulsión —que suele adquirir la cualidad de la “forma multitud” que decía Zavaleta— vuelven a presentar las características mencionadas.

Por su parte las tradicionales organizaciones *sindicales* no han podido superar hasta ahora la quiebra del modelo de estado nacionalista —en el que eran protagonistas centrales— quiebra que produjo por una parte su debilitamiento numérico (fruto del desempleo masivo, de la *flexibilización* y discriminación laboral, y de la informatización de la economía) y por otra la desestructuración de sus entidades matrices, empezando por la COB y las CODEs. Sin embargo sigue habiendo organizaciones sindicales relativamente fuertes, como las del magisterio o de los trabajadores en salud, o de los trabajadores de la prensa, o de esa minoría de estudiantes organizados, ya sean universitarios o de secundaria, que podrían ser interlocutores interesantes.

Lo que no se puede ignorar es que, hablando en términos generales, el actual proceso de cambio tiene sólidas raíces en el área rural-campesina —pensemos por ejemplo en ese importante movimiento de unificación de fuerzas sociales que es el llamado ‘Pacto de Unidad’—, mientras que en el área urbana —donde además se concentra la fuerza del bando que se resiste al cambio— encuentra un preocupante vacío (a las ciudades no llega el Pacto de Unidad), vacío que se expresa también en la estructura del MAS y que hace doblemente necesaria una tarea de información, movilización y organización política en dicha área.